

Octubre 23 de 1946

59ª REUNION — 1ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del contraalmirante ALBERTO TEISAIRE,
presidente para el caso de acefalía

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

SENADORES PRESENTES:

ANTILLE, Armando G.
AVENDAÑO, Arcadio B.
BASALDUA, Juan Carlos
BAVIO, Ernesto F.
BUSQUET, Alfredo
CRUZ, Luis
DURAND, Alberto
FIGUEIRAS, Demetrio
GOMEZ DEL JUNCO, Felipe
GOMEZ HENRIQUEZ, Samuel
MARTINEZ, Ramón Linídr
MATHUS HOYOS, Alejandro
MOLINARI, Diego Luis
RAMELLA, Pablo A.
SAADI, Vicente Leonides
SOSA LOYOLA, Gilberto
TANCO, Miguel A.
TASCHERET, Oscar
TEISAIRE, Alberto
VALLEJO, César
ZERDA, Justiniano de la

AUSENTES, CON AVISO:

AMELOTTI, Osvaldo
ARRIETA, Alfredo J. L.
HERRERA, Julio
LAZARO, Juan Fernando de
LORENZON, Ricardo Octavio
LUCO, Francisco R.
SOLER, Lorenzo (h.)

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo acompañando copia del decreto 14.323 por el que se dan por terminadas las sesiones de prórroga y se convoca al Honorable Congreso a sesiones extraordinarias, a partir del día 21 del corriente.

II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se abre un crédito

al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por la suma de \$ 80.000 m/n. para atender los gastos que demande el envío de una misión especial a España.

III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo creando el Registro de Exportadores.

IV.—Mensaje del Poder Ejecutivo acompañando el Plan de Realizaciones e inversiones para el quinquenio 1947-1951 y los proyectos de ley que lo integran.

V.—Mensaje del Poder Ejecutivo remitiendo copia del decreto por el que se incluye entre los asuntos a tratarse en sesiones extraordinarias el relativo a la erección de un monumento al descamisado.

VI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación de un monumento al descamisado, en Plaza de Mayo.

VII.—Comunicaciones del Honorable Senado.

2.—Los senadores designados para formar parte de las delegaciones a Chile y Méjico solicitan autorización para integrarlos y ausentarse del país. Se concede.

3.—Proyecto de declaración de la Comisión de Negocios Constitucionales eximiendo de responsabilidad al ciudadano Segundo Ismael Ferreyra, jefe de la oficina de Correos de Metán, que transmitió el telegrama que dió origen a la cuestión de privilegio planteada por el senador Durand. Se trata sobre tablas y se aprueba.

4.—Manifestaciones.

5.—A-moción del senador Antille se resuelve solicitar a la Comisión de Negocios Constitucionales les el pronto despacho en el asunto referente a investigación de permisos de exportación al Uruguay.

6.—Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo a que se refiere el número VI. Se aprueba.

7.—Apéndice:

- I.—Sanciones del Honorable Senado.
 II.—Comunicaciones del Honorable Senado al Poder Ejecutivo.

—En Buenos Aires a los veintitrés días del mes de octubre de 1946, siendo las 16 y 30, dice el

Sr. Presidente (Teisaire). — Queda abierta la sesión con la presencia de 16 señores senadores:

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Teisaire). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

—Se lee:

Buenos Aires, 10 de octubre de 1946.

Al Honorable Senado de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, llevando a su conocimiento, en copia autenticada, el decreto 14.325, dictado en la fecha, mediante el cual se dan por terminadas las sesiones de prórroga y se convoca al Honorable Senado a sesiones extraordinarias a partir del día 21 del corriente mes, para considerar el plan de gobierno, los proyectos de ley que lo acompañan y los asuntos ya sancionados por una de las Cámaras, excepto los que se refieran a materias iguales, análogas o afines a las contenidas en el expresado plan.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.
 Angel G. Borlenghi.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1946.

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Danse por terminadas las sesiones de prórroga y convócase al Honorable Congreso a sesiones extraordinarias a partir del día 21 del corriente mes, para considerar el plan de gobierno, los proyectos de ley que lo acompañan y los asuntos ya sancionados por una de las Cámaras, excepto los que se refieran a materias iguales, análogas o afines a las contenidas en el expresado plan.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

PERÓN.
 Angel G. Borlenghi.

—A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Sr. Presidente (Teisaire). — Correspondería que el Honorable Senado fije los días y horas de sesión.

Sr. Molinari. — Hago moción, señor presidente, para que se fijen los mismos días en que hasta ahora ha sesionado el Senado, es decir, los miércoles, jueves y viernes, a la hora 16.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Teisaire). — Se va a votar la moción del señor senador por la Capital.

—Se vota y resulta afirmativa.

II

Buenos Aires, 14 de octubre de 1946.

Al Honorable Congreso Nacional.

El Poder Ejecutivo nacional tiene el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley, por el que se asigna un crédito extraordinario al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por la suma de \$ 60.000 m/n. con destino a la atención de los gastos que demandará el envío a España de una misión especial argentina.

Teniendo en cuenta la urgencia con que el citado departamento debió contar con los fondos de referencia, el Poder Ejecutivo ha dictado un decreto tomándolos de rentas generales, con carácter de anticipo.

El Poder Ejecutivo no duda de que vuestra honorabilidad asignará el envío de la misión, especial a España la importancia principalísima que reviste para las relaciones entre ambas naciones y en tal sentido solicita la sanción favorable del proyecto que se acompaña.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.
 Juan Atilio Bramuglia. — Ramón Antonio Cereijo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Abrese un crédito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por la suma de sesenta mil pesos moneda nacional (\$ 60.000), con destino a atender los gastos que demande el envío de una misión especial a España.

Art. 2º — La suma de \$ 60.000 m/n. a que se refiere el artículo precedente, se tomará de rentas generales.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan Atilio Bramuglia. — Ramón Antonio Cereijo.

—A la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Finanzas.

III

Buenos Aires, 14 de octubre de 1946.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El comercio exterior argentino ha experimentado tal desarrollo en los últimos años que exige que el Estado cumpla íntegramente su natural función de contralor, velando por el alto concepto de que gozan nuestras exportaciones no ya solamente en los tra-

funcionarios basándose en la función de cada repartición y en las ensayos de racionalización de trabajo.

4º) Estudiar los cuadros de amortización de las vacantes que se produzcan y cuando éstas no puedan amortizarse cubrir las plazas con funcionarios dedicados a materias afines.

5º) Crear en todos los departamentos y organismos autárquicos y autónomos, cursos de cultura administrativa y de conocimientos específicos a cargo de funcionarios de reconocida competencia, asignando premios a los mejores trabajos presentados y estimulando la mayor dedicación y el conocimiento del verdadero sentido de la función pública al servicio del Estado con el concepto de responsabilidad.

6º) Planificar la composición de los cuerpos generales de la administración mediante el estudio de las condiciones que deberán exigirse para el ingreso; programas de materias, títulos o conocimientos prácticos y composición y forma de actuar de los tribunales clasificadores.

7º) Preparar la estructura de los cuerpos técnicos de cada departamento, con respecto de cargos que deben desempeñarse por funcionarios con título universitario mediante ingreso por concurso oposición; estudios de programas, composición de los tribunales clasificadores y sistemas de ascensos, para el momento en que por haberse amortizado las vacantes sea preciso iniciar las convocatorias para el ingreso en cada cuerpo técnico del Estado, respetando los derechos adquiridos por los actuales funcionarios.

8º) Corregir severamente o separar de la administración a todos aquellos funcionarios que por incomprensión o mala voluntad obstaculicen la realización de lo que se expone en los anteriores incisos.

Además de las recomendaciones consignadas de carácter general, debe contemplarse la forma de nombramiento de cierta clase de funcionarios de categoría y responsabilidad, que es preciso analizar por separado y preparar desde ahora a los respectivos departamentos para fijar las normas de ingreso, actuación y ascensos en concordancia con la Constitución nacional cuando ello sea necesario.

Se trata de funciones que fueron desde su origen monopolizadas por una clase social determinada y que es preciso democratizar y atemperar al sentido y doctrinas de la revolución que ha forjado el actual gobierno.

Se hace referencia principalmente a los cargos judiciales, cátedras universitarias y cuerpo consular y diplomático.

Siendo propósito del Poder Ejecutivo que el acceso a los estudios universitarios no sea un monopolio de clases económicamente privilegiadas, sino patrimonio también de las clases trabajadoras, al exigirse necesariamente pruebas de idoneidad y aptitud para el ejercicio de los cargos por medio de concurso oposición libre, podrán concurrir a tales concursos todos los que se crean capacitados y ostentan el título universitario necesario, tengan o no vinculación con clases sociales que hasta ahora han sido las dirigentes, beneficiándose el Estado al tomar a su servicio inteligencias que se malograban por pertenecer a una clase social humilde.

Al exponer la labor que ha de realizar cada ministerio o secretaría de Estado, se propondrán las bases correspondientes al ingreso y ejercicio de tales funciones dentro de los principios anteriormente expuestos.

CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO

Como base de la organización administrativa del Estado, en cuanto se refiere a las normas que deben regir los trámites administrativos y los recursos que se establecen en garantía de los intereses particulares, se crea el Cuerpo de Abogados del Estado, bajo la jefatura suprema del procurador del Tesoro mediante una dirección general que agrupe las actuales asesorías y oficinas de asuntos legales existentes en los distintos departamentos administrativos, dirección general cuya misión será la de unificar directivas y criterios en la defensa y asesoramiento de la administración pública, ordenar los trámites y ser organismo regulador de lo contencioso del Estado.

El Cuerpo de Abogados del Estado tendrá también a su cargo la representación y defensa de los intereses del Estado ante los tribunales contenciosoadministrativos.

En la parte del plan correspondiente al Departamento de Justicia se incluye el proyecto de ley de bases creando los tribunales contenciosoadministrativos y el procedimiento administrativo previo, mediante los recursos de reconsideración ante la propia autoridad que dictó la resolución y el recurso jerárquico ante el Poder Ejecutivo.

Se inserta a continuación el proyecto de ley referido creando el Cuerpo de Abogados del Estado.

CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO

Proyecto de ley

Exposición de motivos

No se concibe ninguna organización administrativa sin ordenamiento jurídico en sus distintas formas: orden jerárquico, precepto a que deben ajustarse los trámites; asesoramiento y defensa de los intereses del Estado confiados al organismo ante terceros y ante los tribunales de justicia. A ello se debe la existencia en todos los departamentos del Estado de oficinas jurídicas; direcciones de asuntos legales, asesorías legales, que con esos nombres u otros dispares cumplen la función asesora y de defensa antes referida. Se cumple esa obligación estatal en forma que no responde a una necesidad natural por los términos a que obedecen esas asesorías sin un plan prefijado y que han ido surgiendo a medida que los distintos problemas exigían soluciones inmediatas. Esa disgregación de actividades se ha llevado a término sin una coordinación superior en cuanto a fines que permitieran correlacionar los particulares de cada una de las entidades, con los fines superiores del Estado. Cada organismo ha encarado sus propios asuntos con un criterio exclusivista y particular, olvidando que al perseguir el logro de sus fines, no conseguían más que parcialmente el de los fines del Estado y esa falta de apreciación de conjunto ha determinado que su gestión no concordara con aquéllos y que resultara en muchos casos obstaculizadora para el cumplimiento de una política superior en el gobierno general del país.

Del simple examen de las formas dispares en que están organizadas esas oficinas, se desprende su parcial eficiencia, pero si se ahonda más en la constitución y organización de aquéllas y en la actuación de su personal, se llega a la consecuencia de que se malogran no pocas iniciativas, se recargan los presupuestos, y el Estado no obtiene el beneficio consiguiente.

La falta de directivas unificadas; de un plan común para toda la administración y de jerarquía ante el exterior en la representación legal de los departamentos, hace que esos funcionarios tanto en la vida administrativa como ante los tribunales no se hallen rodeados de las características que les corresponden como verdaderos representantes del Estado con plena conciencia del valor que ello debe representar, no por falta en la mayoría de los casos de capacidad o preparación, sino por no hallarse respaldados por el propio Estado que no cuidó de dignificar ni de preparar para la función a tan importante sector de la administración pública.

A ello obedece el proyecto de ley que se inserta a continuación, cuya finalidad de dotar a la Nación de asesores y defensores eficientes puede conseguirse mediante su aprobación. Se basa en principio, en utilizar las asesorías existentes dotándolas de una estructura orgánica que les permita la mayor unidad de acción dentro de un mismo cuerpo cuya dirección general recaerá en el procurador del Tesoro. Las actuales asesorías pasarían a ser delegaciones de esa dirección general, la que contaría con un subdirector y un número de funcionarios del cuerpo; una inspección general encargada de sostener el prestigio y competencia de los funcionarios y los elementos necesarios para evacuar consultas y elevar el conocimiento específico del derecho administrativo al mismo tiempo que se obtenga la mayor preparación y eficiencia en cuanto se refiere a lo contencioso del Estado.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º — Créase el Cuerpo de Abogados del Estado. Tendrá a su cargo el asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales, del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que integran la administración.

Art. 2º — La dirección general del cuerpo lo ejercerá el procurador del Tesoro, sin perjuicio de las funciones que tiene asignadas por leyes especiales. Este será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Art. 3º — El Cuerpo de Abogados del Estado se compondrá de una dirección general y delegaciones en cada uno de los ministerios, secretarías de Estado y reparticiones de la administración de jurisdicción nacional que tengan actualmente constituidas asesorías o direcciones de asuntos legales, y las que en lo sucesivo puedan crearse.

Art. 4º — Serán funciones del Cuerpo de Abogados del Estado, que se ejercerán por la dirección general o por las distintas delegaciones según corresponda:

- a) Representar al Estado y a sus reparticiones ante las autoridades judiciales, tanto si aquél litiga como actor o si lo hace como demandado, siempre que no corresponda esta actuación al ministerio fiscal. También representarán al Estado ante los tribunales contenciosoadministrativos;
- b) Instruir los sumarios que el Poder Eje-

cutivo o los organismos administrativos les encomienden para esclarecer la comisión de hechos punibles o irregularidades atribuidas al personal de la administración o a terceros y preparar cuando corresponda el traslado a la autoridad judicial competente de lo actuado;

- c) Asesorar a las autoridades a que se hallen adscritos en todo asunto en que los mismos requieran una opinión jurídica;
- d) Promover el ajuste de los trámites administrativos a las leyes que los regulen y ser los ordenadores de lo contencioso del Estado, informando en la resolución de los recursos administrativos establecidos y que se establezcan y velando por el recto procedimiento;
- e) Intervenir los pliegos de condiciones para licitaciones públicas, redes de obras o servicios públicos o de adquisición de materiales; en las adquisiciones sin subasta previa cuando su importancia lo requiera, en la adjudicación en cuanto a la redacción de contratos, en las reclamaciones a que dé lugar la interpretación de éstos y en los pedidos de rescisión de los mismos. La reglamentación determinará los casos en que estas intervenciones sean necesarias;
- f) Asesorar sobre todo punto de interpretación legal o reglamentaria y en todo pedido de franquicia o exención de cualquier clase de contribuciones o impuestos y en aquellos casos en que deba decidirse sobre tributaciones que no se hallen expresamente previstos en las leyes y reglamentos;
- g) Realizar estudios profesionales para mejorar las leyes y reglamentaciones vigentes en la administración pública.

Art. 5º — La dirección general como asesora del Poder Ejecutivo y las delegaciones, compondrán las asesorías de los distintos ministerios y reparticiones, pero estas últimas deberán supeditar su acción a las instrucciones que imparta la primera para unificar criterios. Además deberán elevarle en consulta aquellos casos cuya resolución pudiera implicar la fijación de un precedente de interés general para toda la administración, y solicitarán su patrocinio en los litigios en que se debatan asuntos de la misma índole o que por la magnitud de los intereses estatales en juego requieran la atención de las autoridades superiores del cuerpo.

Art. 6º — La dirección general estará compuesta de los siguientes organismos:

- a) Dirección general, y subdirección con el número de funcionarios necesarios

del cuerpo, que tendrán a su cargo la redacción de instrucciones generales, contestación de las consultas de las delegaciones y el patrocinio letrado de los asuntos a que se refiere el artículo anterior;

b) Inspección de delegaciones, que sostendrá el prestigio del cuerpo, la recta conducta y competencia de sus funcionarios y formará los tribunales calificadores para los ingresos y promociones preparando previamente los programas correspondientes;

c) La dirección general bajo el ordenamiento del procurador del Tesoro, podrá actuar como instituto de derecho administrativo y de lo contencioso del Estado y se expedirá sobre todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias. Cuidará en tal sentido de que las delegaciones propongan la reforma que la realidad práctica aconseje.

Art. 79 — Las delegaciones se organizarán de acuerdo con las necesidades del organismo administrativo a que se hallen adscritas y dependerán disciplinariamente de este último, sin perjuicio de su dependencia de la dirección general desde el punto de vista estrictamente profesional. A tal efecto los departamentos del Estado solicitarán de la dirección general el número de funcionarios del cuerpo que según su organización sean necesarios.

Art. 89 — El Cuerpo de Abogados del Estado se constituirá como una carrera especial dentro de la administración con su escalafón propio. El ingreso a ella sólo podrá tener lugar mediante concurso oposición que demuestre en el aspirante, además de los conocimientos generales de derecho, profundos conocimientos de derecho administrativo y organización del Estado. Las promociones se harán respetando rigurosamente el orden jerárquico y siempre con informe favorable de la inspección.

Art. 99 — Independientemente de la categoría correspondiente al puesto que se desempeñe, existirá la categoría personal a la que corresponderá ascensos por quinquenios.

Art. 10. — Para la formación del cuerpo, se tendrá en cuenta la constitución actual de las asesorías letradas de los actuales organismos eligiendo a los funcionarios que desempeñen función específica para la que se precise el título de abogado. Esta elección deberá hacerla el Poder Ejecutivo previo informe de la dirección general por medio de su inspección.

Art. 11. — La tenencia por un funcionario con empleo en la administración del título de abogado, no le dará ningún derecho a ser considerado como integrante del cuerpo, si no desempeña funciones específicas de asesoramiento

to o abogacía, aunque se halle adscrito a una asesoría u oficina de asuntos legales.

Art. 12. — Una vez constituido el cuerpo sobre tales bases, se estudiarán las vacantes que pudieran llenarse y las que en lo sucesivo convenga ocupar y se llamará a concurso oposición para completar el número de funcionarios componentes del cuerpo.

Art. 13. — Para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado se precisa: 1º, ser ciudadano argentino; 2º, poseer el título de abogado expedido por una universidad nacional; 3º, ser mayor de 25 años; 4º, informes de conducta dimanado de las autoridades y de una investigación especial; 5º, no estar sujeto a ningún procedimiento de carácter penal; 6º, no hallarse en quiebra ni en concurso, y 7º, poseer las demás condiciones que determine la reglamentación.

Art. 14. — La dirección general elaborará el programa de materias y de los ejercicios teóricos y prácticos que deban constituir el concurso oposición, y la reglamentación determinará la constitución del tribunal clasificador y la forma de actuar del mismo para calificar a los aspirantes. El orden de calificación determinará el lugar que en lo sucesivo ocupe en el escalafón del cuerpo.

Art. 15. — Ninguna repartición nacional podrá nombrar asesor letrado ni otra clase de funcionario que específicamente ejerza función para la que precise el título de abogado sin solicitarlo antes a la dirección del Cuerpo de Abogados del Estado; ésta examinará si la función que quiere encomendarse al funcionario encuadra dentro de las que corresponden al cuerpo y siendo así designará el nombre del funcionario o funcionarios que se encuentren en condiciones de ocupar tales cargos.

Art. 16. — Los abogados del Estado podrán ser trasladados de una repartición a otra por necesidades del servicio o cuando lo disponga la dirección general para la mejor formación profesional de los funcionarios del cuerpo.

Art. 17. — Los haberes de estos funcionarios serán abonados por el departamento o repartición en que presten servicios y con cargo al presupuesto del mismo y la categoría que corresponda.

Art. 18. — Al proyectar la reestructuración de las actuales asesorías jurídicas para adaptarlas a la nueva organización, la dirección central del cuerpo podrá seleccionar los funcionarios que actualmente prestan servicios, incluso sometiendo a examen, toda vez que éstos formarán la cabeza del cuerpo que no puede desentonar con la formación de los funcionarios que entren por oposición.

Art. 19. — El Poder Ejecutivo podrá aplazar el cumplimiento de esta ley en cuanto se refiera a las asesorías legales de las instituciones bancarias del Estado, hasta tanto se establezca

la forma en que podrían actuar las delegaciones de abogados del Estado en tales instituciones.

Art. 20. — La dirección general del Cuerpo de Abogados del Estado presentará al Poder Ejecutivo el proyecto de reglamentación de esta ley en el término de noventa días.

~~nueva reforma de la Constitución, se hace indispensable el mejor y más racional aprovechamiento de las posibilidades actuales, basadas en una experiencia que se encuentra en período de formación y que el Poder Ejecutivo conoce mejor que otras instituciones. Y como no sería conveniente modificar frecuentemente por medio de leyes orgánicas de ministerios, la estructura administrativa de la Nación, parece lo más adecuado~~